

Fallo "General Tomás Guido S.A.C.I.F."

Corte Suprema de Justicia de la Nación - 26 de agosto de 2025

Proceso Concursal y Carga Probatoria

El proceso concursal asegura la concurrencia de todos los acreedores sobre el patrimonio del deudor, en **igualdad de condiciones**, salvo los privilegios previstos en la ley 24.522 (LCQ).

Este procedimiento permite determinar los acreedores legítimos, el importe real de sus créditos y el orden de pago conforme la LCQ.

Carga Probatoria

Recae en el acreedor que pide la verificación (art. 377 CPCCN)

Fisco Nacional

Es un acreedor más y debe presentar documentación respaldatoria

Acto Verificatorio

No crea el crédito, sino que lo reconoce



Lisicki, Litvin & Abelovich



Fallo "General Tomás Guido S.A.C.I.F."

Corte Suprema de Justicia de la Nación - 26 de agosto de 2025

Hechos del Caso

La AFIP (hoy ARCA) se presenta a verificar sus créditos con origen principalmente en saldos de declaraciones juradas y planes de facilidades de pago y admiten parcialmente la verificación (en una porción menor), alegando que no se encontraban debidamente probada la real existencia y alcance de los reclamos que se pretendían revisar.

La Cámara sostuvo que si bien es cierto que las certificaciones de deuda emitidas por el organismo fiscal gozan de la presunción de legitimidad que consagra el artículo 12 de la ley 19.549, ello no implica la **directa sumisión a sus constancias, si no se presenta la base documental y explicativa que permita seguir la secuencia lógica que pruebe la existencia de la deuda reclamada.**

Planteo del Fisco Nacional

Argumentos Principales

- El Fisco Nacional alegó que la sentencia de la Cámara incurría en arbitrariedad y una errónea interpretación de las leyes federales (11.683, 18.820, 19.549), lo que violaba la garantía del debido proceso y el derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional).
- Insistió en que la sentencia de la Cámara no valoró adecuadamente la prueba aportada y que la propia concursada había reconocido la deuda en sus declaraciones juradas y en la denuncia del art. 11 de la LCQ (\$4.849.303,86).



Resolución de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al Dictamen de la Procuración General, declaró **admisible** el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP, revocó la sentencia de la Cámara y ordenó devolver los autos para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme lo decidido.

O1

Presunción de Legitimidad

La Corte recuerda que la presunción de legitimidad de los actos administrativos constituye una **garantía de seguridad y estabilidad**, que solo cede frente a vicios formales o sustanciales graves, o cuando se basa en presupuestos fácticos manifiestamente irregulares y debidamente comprobados.

O2

Conciliación de los regímenes

La Corte señala que el tribunal inferior confrontó indebidamente dos regímenes distintos:

- **la carga probatoria del art. 377 del CPCCN**, propia del derecho procesal privado, y
- **la presunción de legitimidad del art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos**, de naturaleza federal.

Señala que las pautas de valoración de la prueba deben interpretarse con un criterio que concilien ambas disposiciones.

O3

Naturaleza de los actos discutidos

Tratándose de declaraciones juradas y liquidaciones en los términos de los arts. 11 y 12 de la Ley 11.683, se imponía a los jueces la obligación de ponderar primordialmente las normas y principios administrativos que específicamente los rigen, sin recurrir de manera mecánica a las reglas civiles sobre carga de la prueba.

Además, ponderó que la propia concursada, al solicitar su concurso preventivo, denunció adeudar un monto al Fisco y que las acreencias insinuadas provenían, casi íntegramente, del incumplimiento de **salos reconocidos en declaraciones juradas y planes de facilidades de pago**.

La Corte concluye señalado que la decisión de la Cámara se basó en una errónea interpretación del derecho federal, que condujo al resultado **absurdo de denegar la verificación de créditos del Fisco que surgían del reconocimiento expreso de la propia deudora**.

Esta decisión se ve reforzada por otros dos pronunciamientos de la Corte Suprema dictados en la misma fecha: *“Diego Deportes S.A. s/ incidente de revisión de crédito”* y *“Len Lar S.A. s/ incidente de revisión de crédito por AFIP”*.

Conclusiones

En el proceso concursal, cuando se trata de créditos fiscales originados en declaraciones juradas o planes de facilidades reconocidos por el contribuyente, el régimen probatorio cambia significativamente.

1

Declaraciones Juradas (Art. 11 Ley 11.683)

Implican reconocimiento expreso de la obligación tributaria, siendo que la Ley 11.683 establece que la determinación y percepción de tributos se efectúa sobre la base de tales declaraciones.

2

Liquidaciones Administrativas (Art. 12 Ley 11.683)

Las liquidaciones de impuestos, intereses y accesorios emitidas por la administración, fundadas en las declaraciones juradas, constituyen títulos suficientes para la intimación de pago y gozan de la presunción de legitimidad de los actos administrativos.

3

Verificación Concursal

En esos casos debe primar la presunción de legitimidad de los actos administrativos y debe verificarse el crédito fiscal.



Reflexión final: Si la deuda fiscal surge de declaraciones juradas y planes de pago reconocidos por el contribuyente, la verificación procede: la presunción de legitimidad y el reconocimiento del deudor eliminan la necesidad de prueba adicional, conciliando derecho público y las reglas concursales.

